

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Guillermina Gómez de Hernández
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 19 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 019 2022 00482 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 173 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente - muerte de pensionado. Reclama cónyuge no requisito de pervivencia del vínculo – 5 años en cualquier tiempo
DECISIÓN	Confirma

Hoy, **cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al **recurso de apelación** presentado por el apoderado de la señora **Guillermina Gómez de Hernández, y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, dentro del proceso que involucra a estas partes, con radicado único nacional 05001 3105 **019 2022 00482** 01.

Auto: en los términos y para los efectos del poder conferido, se le reconoce personería jurídica a la abogada Claudia Milena Guarín García, para que continúe con la representación de Colpensiones.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 022**, que se plasma a continuación.

Antecedentes

La demandante pretende que Colpensiones sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha de la muerte de su esposo Maximiliano Hernández, incluyendo las mesadas adicionales, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación y las costas.

En sustento de ello afirma que, el 15 de junio de 2017 falleció Maximiliano Hernández, quien para dicha data ostentaba la condición de pensionado por vejez, prestación que era compartida entre EPM y Colpensiones. En el momento de su deceso, recibía \$96.791.00 por parte de EPM (resolución 117 del 26 de mayo de 1987) y \$783.139,00 de Colpensiones (acto administrativo 1233 de 1987). Que contrajo matrimonio con Maximiliano el 22 de diciembre de 1951, formando una familia y compartiendo lecho, techo y mesa. De esa unión nacieron 12 hijos, de los cuales 11 sobreviven. En 1992, después de más de 40 años de convivencia, se separó debido a problemas de salud que afectaban a ambos, necesitando del cuidado de sus hijos. No obstante, el vínculo matrimonial se mantuvo, así como también la ayuda mutua y la solidaridad. Maximiliano se encargó de los gastos de ella hasta su último día de vida. Menciona que el 27 de junio de 2017 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, negada en la Resolución SUB147101 del 02 de agosto siguiente, argumentando que la unión solo persistió hasta el 20 de marzo de

1987. Que el 6 de julio de 2017, realizó reclamación similar ante E.P.M., obteniendo el otorgamiento de la prestación mediante el acto administrativo 2017-RES-13112 del 30 de agosto de 2017.

Mediante providencia del **05 de diciembre de 2022, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Colpensiones, debidamente notificada, presentó escrito de contestación en el cual reconoce la fecha del deceso del señor Maximiliano, su condición de pensionado a través de la entidad y de E.P.M, el monto que percibía para la data del deceso, la petición de otorgamiento de la prestación de sobrevivientes y la respuesta negativa. Los demás supuestos no le constan, ateniéndose a lo que resulte probado. **Resistió las pretensiones**, proponiendo excepciones de fondo tendientes a enervarlas, tales como: inexistencia de la obligación de pagar pensión de sobrevivientes, prescripción, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, ausencia de causa para pedir, imposibilidad de condena en costas, compensación, buena fe y la innominada o genérica.

La primera instancia culminó con **sentencia** proferida el 27 de julio del año en curso, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, en la que condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Guillermina Gómez, la prestación de sobrevivientes generada por el deceso del señor Maximiliano Hernández, sobre 14 mesadas anuales, calculando el valor del retroactivo entre el 24 de noviembre de 2019 y el 30 de junio de 2023, en la suma de \$49.007.044,00. A partir del 1º de julio se seguirá cancelando una mesada de \$1.160.000, sin perjuicio de los aumentos de ley. Autorizó los descuentos a salud del valor a sufragar. Dispuso la indexación de la condena. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, y

parcialmente acreditada la de prescripción. Absolvió de las restantes pretensiones e impuso costas a la vencida.

Como sustento, manifestó el fallador que, la normatividad aplicable al asunto es la vigente al momento del fallecimiento del pensionado, esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dejando claro que no se encontraba en discusión la causación del derecho, por estarse ante muerte de pensionado. En cuanto al requisito de convivencia hizo referencia a la jurisprudencia actual y reiterada de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, la cual determina que la cónyuge separada de hecho puede reclamar legítimamente la pensión si convivió con el causante por al menos 5 años, en cualquier tiempo, estableciendo según los medios de prueba aportados, tanto documentales como testimoniales, que la pareja estuvo unida entre la fecha en que contrajeron matrimonio hasta por lo menos cuando reclamó el pago de la pensión en 1987, lapso dentro del cual, procrearon 12 hijos, cumpliéndose así con los 5 años.

Concedió la prestación desde el 24 de noviembre de 2019, al haber hecho aparición el fenómeno extintivo de la prescripción, por reclamarse el 27 de junio de 2017, negada en el mismo año y la demanda presentarse el 24 de noviembre de 2022.

En relación a los intereses moratorios, señaló que, siguiendo la posición de la máxima autoridad en la jurisdicción laboral, no procedían, en tanto, la prestación es concedida a través de una interpretación jurisprudencial, por lo que, no hubo desconocimiento de la normatividad en el momento en que se emitió la resolución que la negó. En consecuencia, dispuso la indexación de la condena.

El apoderado de la demandante manifestó su desacuerdo parcial y formuló **recurso de apelación**. En su argumentación, resaltó que existe jurisprudencia que sostiene que no se deben otorgar intereses moratorios en situaciones de pensiones de sobrevivientes cuando la cónyuge es separada de hecho y existe reconocimiento previo a una compañera permanente o cuando la prestación se otorga en virtud del principio de la condición más beneficiosa, escenarios que difieren del caso planteado. En concordancia con lo establecido en los expedientes 42783 del 13 de junio de 2012, 18789 del 29 de mayo de 2013 y 18512 del 2022, solicita se revoque lo atinente a este aspecto y, en su lugar, se cancelen los intereses.

Al ser el fallo adverso a los intereses de Colpensiones, también se conoce en el grado jurisdiccional de consulta.

Del término **para presentar alegaciones** hizo uso Colpensiones, solicitando no se emita condena a intereses moratorios, al haberse otorgado el derecho en sede judicial una vez acreditado el requisito de convivencia real y efectiva por un periodo de 5 años en cualquier tiempo, conclusión a la que no era posible llegar en sede administrativa.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados, se tienen: la señora Guillermina Gómez y Maximiliano Hernández contrajeron matrimonio el 22 de diciembre de 1951, falleciendo este último el 15 de junio de 2017. En la Resolución 001233 del 13 de marzo de 1987, se le otorgó al señor Maximiliano pensión vitalicia de vejez a partir del 14 de noviembre de

1986, en cuantía de \$27.639,00, con incremento por cónyuge de \$2.354,00. El 26 de mayo de 1987, E.P.M. emitió Resolución en la que le concedió pensión compartida al señor Maximiliano, desde el 16 de marzo de 1987. Ante el deceso de su consorte la actora presentó solicitud de asignación de sobrevivientes tanto a Colpensiones – 27 de junio de 2017-, como a E.P.M. En acto administrativo 2017-RES-13112 del 30 de agosto de 2017, E.P.M., otorgó la prestación a Guillermina y en Resolución SUB147101 del 02 de agosto de 2017, Colpensiones le resolvió de manera negativa, argumentando que: *"en las declaraciones extra juicio de terceros y de la solicitante se establece que la convivencia entre la señora GOMEZ DE HERNANDEZ GUILLERMINA ya identificado, con el causante fue desde el 22 de diciembre de 1951 hasta el 20 de marzo de 1987."*

Considerando el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, el **problema jurídico** en esta instancia se centra en determinar si es posible el reconocimiento y pago de la pensión reclamada por la actora en calidad de cónyuge del señor Maximiliano. En caso de responder afirmativamente, se procederá a examinar lo concerniente al retroactivo y la viabilidad o no de conceder los intereses moratorios.

En ese orden de ideas, frente a la calidad de beneficiaria, se tiene como criterio jurisprudencial decantado que la norma a observar para definir el derecho pensional es la vigente a la fecha del deceso del pensionado, para el caso, **15 de junio de 2017**, por lo que es aplicable el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003. Dicha preceptiva estipula como beneficiarios:

- a) *En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. **En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge** o la compañera o compañero permanente*

supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

Así, al no existir duda de la causación del derecho, al ser el fallecido pensionado por vejez (Resolución 001233 del 13 de marzo de 1987), queda por establecer el requisito de **convivencia no inferior a cinco años anteriores al deceso**, siendo este el **elemento material** que da derecho a la prestación, y el **lapso de cinco años de obligatoria acreditación** cuando de muerte de pensionado se trata, tal como se adoctrinó en sentencia SL1730 del 3 de junio del año 2020, donde revalida que el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, exige un tiempo mínimo de convivencia de 5 años *“pero únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión”*.

Precisándose por la jurisprudencia especializada frente a la convivencia, que esta tiene lugar cuando entre las personas de la relación, existió un *«[...] vínculo dinámico y actuante de solidaridad y acompañamiento espiritual y económico»* (CSJ SL, 10 mayo 2005, radicación 24445), sustentado en *«[...] lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua»* (sentencia SL1576-2019), y frente al contenido material de la misma en sentencia SL1576-2019, se explicó que *«[...] la legislación y la jurisprudencia acogen el criterio material de convivencia efectiva como elemento fundamental para determinar quienes tienen la calidad de beneficiarios»*, basada en la demostración de *«[...] muestras reales y efectivas de la continuación de la vida común»*, siendo la prueba de este requisito, por un término no inferior a cinco años, esencial para acreditar la condición de beneficiario de la sustitución pensional,

exigiéndose para ello un mínimo probatorio, explicado en sentencia SL4050 de 2019, en los siguientes términos:

"Por mínimo probatorio se entiende el nivel de convencimiento judicial, derivado de la valoración del conjunto de pruebas, que sirve para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el trámite jurisdiccional. Así pues, en el ejercicio de la función judicial, el juez formará su convencimiento al punto de encontrar demostrado el hecho en función de la disposición jurídica de la cual se derivarán los efectos, a partir de los postulados que informan el derecho a la prueba -artículo 29 de la Constitución Nacional- y conforme con la regla de juicio establecida, en el caso del procedimiento laboral, por el artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así pues, el estándar o mínimo estará determinado por el régimen normativo que sea aplicable a la situación jurídica que sirve de base a la controversia judicial.

En casos como este, la situación jurídica consistente en la causación de una pensión de sobrevivientes, está regida por las disposiciones positivas que constituyen el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuya dinámica normativa es el de la causación objetiva, es decir, que el reconocimiento de las prestaciones está condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada prestación. Es así como la pensión de sobrevivientes sólo será reconocida en la medida en que el pretendiente beneficiario demuestre el cumplimiento cabal de las exigencias normativas para tal efecto.

Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la observancia de un estándar probatorio de prueba necesaria... "

No puede perderse de vista que, a partir de una interpretación armónica del inciso 3º del literal b) ya citado, se ha sostenido que, en caso de separación de hecho, la cónyuge no pierde el derecho pensional respecto del fallecido, sosteniendo la Corte que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado **«en cualquier tiempo»**. Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del *de cujus*, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ

SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020), por lo que no resulta correcto sostener que el cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho, debe acreditar el requisito de convivencia en cualquier tiempo y, además, que los lazos afectivos, de solidaridad, de familiaridad, de apoyo y socorro, persistieron hasta el fallecimiento del causante, en tanto, la jurisprudencia reciente y reiterada del órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, a partir de la SL5169-2019, ha sido enfática en establecer que de la normativa transcrita se colige que, la acreditación para la data del óbito de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Así en esta sentencia se indicó que:

... la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, no puede convertirse en una causal para negar un derecho, máxime cuando la ley a cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma.

Luego, la cónyuge separada de hecho, "pero con vínculo matrimonial vigente, no tiene como carga demostrar la continuidad de los lazos familiares y afectivos, dado que no constituye esta circunstancia una exigencia legal prevista en el inciso 3.º del literal b) antes transcrito" (ver sentencias SL359-2021, SL966-2021, SL1707-2021, SL2015-2021, SL2464-2021, SL4321-2021, SL5259-2021, SL2257-2022, SL401-2023 y SL633-2023)

De acuerdo con lo expuesto y tras analizar el material probatorio obrante, se concluye que la negativa de la pensión de sobrevivientes se fundamentó en el hecho de que las declaraciones extrajuicio indicaban que la convivencia entre la pareja se dio *desde el 22 de diciembre de 1951 hasta el 20 de marzo de 1987*. Este aspecto se confirma al observar el archivo administrativo, en el cual Roquelina de la Cruz Uribe Munera manifestó el 23 de junio de 2017 ante la Notaría Única de Sabaneta lo siguiente:

"DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS SEÑORES GUILLERMINA Y MAXIMILIANO, ESTUVIERON CASADOS COMPARTIENDO BAJO EL MISMO TECHO Y EN FORMA PERMANENTE DURANTE 36 AÑOS, DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DE 1951 HASTA EL 20 DE MARZO DE 1987, ESTA SEPARACION SE DIO POR MOTIVOS DE SALUD Y ECONOMICOS, PERO AUN ASI SIGUIERON CASADOS HASTA EL DIA DEL FALLECIMIENTO DE MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS ES DECIR 65 AÑOS.-----SE Y ME CONSTA QUE EL SEÑOR MAXIMILIANO HERNANDEZ, ERA QUIEN VELABA Y ASISTIA ECONOMICAMENTE POR EL HOGAR, ASI PUES GUILLERMINA GOMEZ DE HERNANDEZ DEPENDIA ECONOMICAMENTE DE UN TODO DEL SEÑOR MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS. ----- SE Y ME CONSTA QUE LOS SEÑORES GUILLERMINA Y MAXIMILIANO, TUVIERON DOCE HIJOS LEGÍTIMOS..." Resaltos fuera del texto

Así como por lo expuesto por el señor Elkin Darío Arredondo Lotero, el 27 de junio de 2017, en la Notaria Única de Caldas, cuando expuso:

"QUE HACE 25 AÑOS CONOZCO A LOS SEÑORES MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS GUILLERMINA GOMEZ GARCIA, EL SR. QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA C.C. NRO 6.637.095 DE LA ESTRELLA ANT, FALLECIDO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 EN ENVIGADO ANT (MUERTE NATURAL), ESTE MATRIMONIO FUE DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1.951 HASTA EL 20 DE MARZO DE 1987, ES DECIR 36 AÑOS DE CONVIVENCIA CONTINUA ININTERRUMPIDA, COMPARTIENDO, LECHO, TECHO Y MESA, DE LA UNIÓN PROCREARON 12 HIJOS UNA DE ELLAS FALLECIDA..." Negrillas intencionales.

Y lo dicho por la señora Guillermina Gómez, el 21 de junio de 2017, ante el Notario Único de Caldas, al haber expresado:

*"BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO, DECLARO QUE FUI CASADA CON EL SEÑOR MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA C.C. NRO. 6.637.095 DE LA ESTRELLA ANT, FALLECIDO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 EN ENVIGADO ANT, DE (MUERTE NATURAL), **ESTE MATRIMONIO FUE DESDE EL 22 DICIEMBRE DEL AÑO 1.951 HASTA EL 20 DE MARZO DE 1987, ES DECIR 36 AÑOS DE CONVIVENCIA CONTINUA E ININTERRUMPIDA**, COMPARTIENDO, LECHO, TECHO Y MESA, DE LA UNIÓN PROCREAMOS 12 HIJOS UNA DE ELLAS FALLECIDA..."* Resalto fuera del texto original.

En el marco de este trámite, se llevó a cabo el **interrogatorio a la señora Guillermina**, quien aseveró que su convivencia con el señor Maximiliano comenzó el 22 de diciembre de 1951 cuando contrajeron matrimonio, manteniéndose unidos durante 38 años. Que se separaron debido a problemas de salud, yéndose él a vivir con una de sus hijas y ella con otra. Sin embargo, él la visitaba periódicamente.

Blanca Inés Ospina Ramírez, quien está casada con Jorge, el hijo de Guillermina, manifestó que conoce a la actora desde hace 45 años, y en razón a ello le consta que estaba casada con el señor Maximiliano, persona que pese a que era muy toma trago siempre veló por su esposa y sus hijos. Atestiguó que Guillermina y Maximiliano vivieron juntos durante más de 30 años, separándose unos años en razón a la enfermedad de Maximiliano, repartiéndose los hijos, quedando la mitad con él y la otra mitad con ella, sin recordar en que año se dio la ruptura. Asevera que visitaba la casa de Guillermina y Maximiliano cada 8 días, adicional a que vivió con ellos unos años. Finalmente destacó que la pareja tuvo 12 hijos, uno fallecido.

Maribel Suarez, quien fue vecina de la señora Guillermina, expresó que la conoce desde hace aproximadamente 40 años. Guillermina estuvo casada con Maximiliano y vivieron juntos durante unos 38 años, no obstante, luego se distanciaron, siguiendo Maximiliano viendo por su esposa. Mencionó que la pareja vivió en la Raya, vereda de la Estrella y

que procrearon 12 o 13 hijos. Manifestó que no recordaba el momento exacto en que se produjo la ruptura de esa unión. Después de la separación, Maximiliano estuvo con otra mujer durante muchos años, sin tener constancia de si para la fecha del deceso de este todavía permanecía con ella.

En ese orden de ideas, concatenando los medios de convicción documentales y testimoniales, a la luz de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S., es posible concluir que la señora Guillermina Gómez demostró el requisito de convivencia exigido por la ley y la jurisprudencia para tener derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge. Se corrobora que el vínculo de pareja iniciado en 1951 no fue liquidado ni disuelto, y aunque se dio un rompimiento, supuesto que es respaldado por el interrogatorio de parte y los testimonios recopilados, así como las declaraciones extra juicio, esto no afecta el derecho, al evidenciarse que la pareja convivió por lo menos desde 1951 hasta 1987, esto es, por espacio de unos 36 años. Además, también se ratifica lo dicho por las deponentes y la conclusión a la que se llega en esta instancia, el reconocimiento por parte del extinto ISS al señor Maximiliano en la Resolución que le concedió la pensión, del incremento por su esposa a cargo y el hecho de haber procreado, según lo dicho por todos los declarantes, 12 hijos. Por lo tanto, al cumplirse los requisitos para otorgar la prestación, se confirma en este aspecto, así como el disfrute desde el 24 de noviembre de 2019, considerando 14 pagos al año, ya que se trata de una sustitución de pensión en la que ha operado la prescripción, de acuerdo con el artículo 151 del del CPT y de la SS. en concordancia con el 488 del CST, en tanto, véase como la prestación se solicitó el 27 de junio de 2017, con negativa en acto administrativo

SUB147101 del 02 de agosto del mismo año, y la demanda se instauró el 24 de noviembre de 2022.

Al realizarse el cálculo del retroactivo, considerando para ello el valor mensual que el señor Maximiliano recibía para la época de su fallecimiento, la cual fue actualizada año a año, arrojando a partir del 2020, cifra por debajo del mínimo, debe procederse al correspondiente ajuste, atendiendo lo dispuesto por el artículo 48 de la Carta Superior, ***ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente***, lo que se reitera en la Ley 100 de 1993, obteniéndose valor idéntico al liquidado en primera instancia, luego, dable resulta confirmar la sentencia en este aspecto, así como la autorización de deducción del aporte a salud.

Véase la liquidación efectuada.

Año	IPC	Valor reconocido	# mesadas	Total retroactivo
2017	4,09%	\$ 783.139		\$ -
2018	3,18%	\$ 815.169		\$ -
2019	3,80%	\$ 841.092	2,23	\$ 1.878.438
2020	1,61%	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	5,62%	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	13,12%	\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000
2023		\$ 1.160.000	7	\$ 8.120.000
			TOTAL	\$ 49.007.044

En cuanto a la no imposición de condena por **intereses moratorios**, es de indicar que en la sentencia SL2117-2022, donde se reitera la SL3130-2020, la Corte precisó aspectos frente a este concepto, así: *i)* su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; *ii)* buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y *iii)* **existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones**

atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. Así, el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena tales intereses, por lo que se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones, **no obstante, para el caso dadas las pautas antes anotadas, se advierte una razón para la negativa** en el año 2017, **única oportunidad en que fue reclamada directamente por la demandante al fondo de pensiones**, la cual obedeció a que la entidad luego de examinar el caso a la luz de la normatividad vigente para la época, verificó que no se acreditó por la actora, en calidad de cónyuge, el tiempo de cinco años de convivencia **inmediatamente anterior al deceso**, criterio que como ya se vio tuvo un giro por parte de la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en tanto, antes de 2019, pedía a la cónyuge separada de hecho con vínculo matrimonial vigente, el requisito de lazos de socorro y ayuda al momento del deceso, estableciendo a partir de dicha anualidad, que el tiempo de convivencia de 5 años podía ser comprobado en cualquier época, tal y como se concluyó dentro del proceso acogiendo dicho criterio, **por lo que se mantiene la absolución en este apartado, y se confirma la actualización de las mesadas mediante el mecanismo de la indexación** atendiendo su causación periódica, ello, ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y el derecho de la actora a percibir el monto real de lo debido.

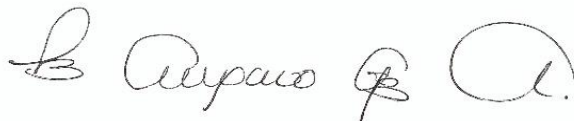
Costas en esta instancia a cargo de la parte actora a quien se desata adversamente el recurso interpuesto. Inclúyanse como agencias en derecho en favor de Colpensiones la suma de \$1.160.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Guillermina Gómez de Hernández**, en contra de **Colpensiones**.

Costas a cargo de la actora y en favor de Colpensiones, inclúyanse la suma de **\$1.160.000,00** como agencias en derecho.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO